

A seis años de iniciada la presente administración, y ante las claras definiciones en materia de política agraria instrumentadas por el Sector Agrario, se percibe un campo donde prevalece la paz social, donde la tranquilidad que viven los hombres y mujeres del medio rural es consecuencia del enorme esfuerzo y de la entereza de quienes día a día entregan su dedicación y empeño profesional en pro de un mejor México.

A su vez, los hombres y mujeres del campo mexicano reflejan en su vida cotidiana la seguridad y satisfacción que representa la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Aunque también esperan poder sumarse al trascendente paso que sigue: el Desarrollo Agrario Integral, el cual es parte del desarrollo rural, y que involucra a todos los actores, hombres y mujeres, servidores públicos, sujetos agrarios y sus organizaciones, pues entre todos deben cimentar el desarrollo que merece el agro nacional.

En este nuestro primer número del año, incluimos varios artículos que abonan, de una u otra forma, a la reflexión y el análisis del campo en México. Abriendo la sección de **Análisis**, iniciamos con el texto de Gilberto José Hershberger Reyes, “Retos y perspectivas de la Reforma Agraria”, donde el autor señala que el objetivo de todo gobierno debe centrarse en “el fomento del crecimiento y el desarrollo con paz social, a fin de asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo”; en ese sentido, los re-

tos del Sector Agrario —asegura Hershberger—, cuyas tareas no sólo deben continuar con el ordenamiento de la propiedad rural, la atención a la conflictividad agraria y el desarrollo agrario, sino que, además de fortalecer estos ejes rectores, tienen que estar cobijadas por un marco normativo adecuado al contexto actual; de ahí la pertinencia de la iniciativa de reformas al marco jurídico secundario en materia agraria, la cual, señala el autor, privilegia la participación de todos los sectores y tiene un sentido social.

Juan Manuel Madrigal Ibarra, en su artículo “Naturaleza jurídica y principales atribuciones de la Procuraduría Agraria”, hace un recuento de las cualidades jurídicas y administrativas de esta Institución, partiendo de sus antecedentes más remotos hasta llegar a 1992, año de la reforma constitucional que dio origen a la Procuraduría Agraria, al tiempo que hace una proyección de las tareas de dicha institución hacia el mediano y largo plazos, destacando el carácter de *ombudsman* especializado en materia agraria como un perfil distintivo que, incluso, hizo necesaria la reforma de la Ley Federal de Entidades Paraestatales por su naturaleza particular.

Por su parte, Ricardo Cruz Rodríguez, en su ensayo “La conciliación, alternativa para la solución de conflictos sociales en el medio rural”, afirma que las controversias por la tierra han limitado en muchas ocasiones el desarrollo social y económico de los núcleos agrarios involucrados; por ello, el esfuerzo del Sector Agrario enfocado en la solución de disensos ha permitido impulsar: el desarrollo de las comunidades, la protección del medio ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos, el incremento en la actividad productiva, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y, como consecuencia loable, la paz social. De ahí la importancia, señala Ricardo Cruz, de que la actual política agraria procure la aplicación de una justicia real y expedita, que privilegie la conciliación como vía preferente para la solución de conflictos. Mediante tres casos conocidos, el autor ejemplifica cómo la estrategia utilizada por el gobierno federal, basada en el diálogo y la concertación, permite soluciones

extrajudiciales que involucran a los núcleos agrarios, lo cual legitima el proceso hasta ser juzgado.

Con el ensayo “Inversiones mercantiles en el agro yucateco a finales de la época colonial”, Betty Luisa Zanolli Fabila hace una descripción histórica de las formas en que el campo yucateco recibió inversiones durante el virreinato, señalando que en el caso de la intendencia de Mérida, que estaba dividida en doce partidos y cada uno bajo el mando de un subdelegado, se observa cómo algunos comerciantes destacados incidieron en el agro yucateco a través del crédito, o bien mediante relaciones de parentesco que se pueden ubicar entre fiadores y subdelegados, figuras que, de acuerdo con la organización político-administrativa de la época, definían los espacios y las relaciones de poder entre la intendencia y el mismo virrey. La investigación que la autora hace permite conocer las distintas mutaciones que a lo largo del tiempo tuvieron algunos comerciantes en la historia *sui generis* de la península de Yucatán.

Por otro lado, Jorge López Negrete, en su artículo “La expropiación en materia agraria”, estudia los términos inherentes al proceso de expropiación, tales como utilidad pública e indemnización, los cuales presentan cualidades particulares dentro de la historia reciente de nuestro país, en donde el solo término de “expropiación” remite a cuestiones de carácter político o social, independientemente de “ser un acto jurídico, procedimiento o medio que requiere para su procedencia la existencia de utilidad pública, la indemnización y la transferencia de la propiedad a la administración”. López Negrete menciona los distintos cuerpos normativos que regulan dicho procedimiento y los complementa con ejemplos de jurisprudencia en la materia, abarcando las distintas aristas que comprende dicho concepto jurídico y relacionándolo con el derecho agrario.

Por su parte, Héctor Meneses Meza y Manuel Morales Jurado, en su artículo “Contribución del PROCEDE en la paz social del campo mexicano”, analizan cómo la instrumentación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE),

que por su magnitud y complejidad técnica no tiene precedentes en el mundo, no sólo ha regularizado la tenencia de la tierra, garantizando los derechos de propiedad de los sujetos agrarios, sino que ha permitido sentar las bases para evitar o solucionar controversias. Los autores señalan que el ordenamiento de la propiedad social mediante este Programa es condición indispensable para solucionar conflictos, pero se requiere una política de seguimiento de los procesos de regularización y de registro de derechos, a fin de que se eliminen resentimientos sociales entre los sujetos agrarios, permitiendo así contribuir a la paz social y al desarrollo de la actividad económica rural.

Como experiencia internacional de un proceso de reforma agraria, presentamos el ensayo de Antônio Márcio Buainain, titulado “Reforma agraria y conflictos de tierras en Brasil”, en el cual el autor analiza la evolución y el manejo de los conflictos agrarios en el periodo 1994-2000, que corresponde a la administración del Presidente Cardoso, durante la cual más de 500 mil familias fueron asentadas en tierras expropiadas dentro del proceso de reforma agraria. Para Márcio Buainain, existe una relación entre las ocupaciones, los conflictos sociales y las acciones de expropiación de la reforma agraria brasileña, al grado de que, afirma el autor, “se puede decir que la reforma agraria se ha realizado mediante el conflicto”.

Cerrando la sección de **Análisis**, presentamos el ensayo “El impacto de las expropiaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México en el contexto de las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional”, de Nancy Colín, en el cual la autora analiza las políticas de desarrollo urbano que han impactado a la propiedad social, al tiempo que señala en qué medida las expropiaciones de tierras ejidales o comunales, como recurso de utilidad pública, pueden beneficiar a distintos sectores. Para la autora, “es necesario evaluar en qué medida el marco legal es apropiado para el ritmo de crecimiento de los asentamientos humanos, así como su articulación con los planes y programas sectoriales...”, y al mismo tiempo, señala, “las le-

yes deben considerar que la dinámica de la sociedad tiende a conceder a los tres niveles de gobierno el carácter de promotores, orientadores y controladores del desarrollo urbano, subestimando la responsabilidad de los agentes económicos de los sectores privado y social en los proyectos urbanos”.

En la sección de **Estadísticas** ofrecemos el trabajo sobre “Controversias agrarias”, el cual presenta datos históricos de 1992 a 2005 sobre los distintos tipos de controversias concluidas ya sea por conciliación, asesoría o representación. La información proviene del CD ROM *Estadísticas Agrarias 2005*, donde destaca, a manera de ejemplo, que la mayoría de las controversias presentadas ante la Institución están concluidas, ya sea por conciliación, asesoría o representación.

En la sección de **Foros** ofrecemos las reseñas del Congreso Internacional de Derecho Social, realizado del 22 al 24 de febrero de 2006 en la UNAM, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha Universidad; de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, del 6 al 10 de marzo del presente, organizado por FAO y que contó con el auspicio del gobierno de Brasil, y del Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural y el Sector Agroalimentario: Estrategias de Futuro, el cual se llevó a cabo del 23 al 25 de marzo de 2006 en San Juan del Río, Querétaro, el cual fue convocado por SAGARPA y el INCA rural.

Finalmente, presentamos las reseñas de los libros *Glosario de términos jurídico-agrarios*, reeditado por la Procuraduría Agraria en 2005, y *Políticas de tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza*, de Klaus Deininger y que fue publicado por el Banco Mundial.

